

Enrico Berlinguer, Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo en el mitin conmemorativo de la fundación del Partido Comunista de España, celebrado en la plaza de las Ventas de Madrid el sábado 10 de mayo.

PCE SESENTA AÑOS DE HISTORIA

MARIA RUIPEREZ

ENTRÉ los partidos políticos de la España actual, los únicos con una nutrida historia a sus espaldas son, como es bien sabido, los dos partidos de la izquierda clásica, el PSOE y el PCE. Por ello, tras la celebración, en 1979, del centenario de la fundación, en la clandestinidad del Partido Socialista Obrero Español, este año le ha tocado al Partido Comunista de España conmemorar el sesenta aniversario de su fundación. Y esta conmemoración, después de un conjunto de conferencias y actividades de carácter académico, culminó en el mitin del pasado sábado en la plaza Monumental de Madrid. Un mitin que, además de demostrar la capacidad de convocatoria de la organización comunista —la prensa ha hablado de 30.000 o incluso de 40.000 asistentes—, tenía un especial significado histórico: era el momento obligado para que la dirección del PCE presentara una reflexión sobre los diversos avatares de su trayectoria política, que han conducido al partido a posiciones muy distintas a las que le caracterizaron en el momento de su fundación.

Citando a Dolores Ibárruri, la figura histórica de la organización que conserva aún vivo su carisma, Santiago Carrillo intentó definir las raíces del partido: "Venimos del tronco ayojo del PSOE y de la tradición de lucha libertaria característica de nuestro país (...).

Los partidos comunistas surgieron rompiendo con una II Internacional que había sido incapaz de oponerse a la primera guerra imperialista mundial, en la que cada uno de los partidos, a excepción del de Lenin, había capitulado ante su propia burguesía". La definición es exacta, aunque había que recalcar otro aspecto decisivo en los orígenes del PCE: la influencia de la revolución de octubre y de las posiciones leninistas, pronto asumidas por la mayoría de los sectores radicales dentro de los distintos partidos socialistas, a favor de la escisión y de la creación de nuevos partidos y de una nueva Internacional. Es en esta doble influencia donde se sitúan los orígenes, complejos y difíciles del comunismo español.

Como en la mayoría de los países europeos, en 1919 y 1920 se dieron en España los primeros pasos hacia la fundación de la nueva organización. En nuestro país fue un sector de las Juventudes Socialistas el que decidió, el 15 de abril de 1920, convertirse en Partido Comunista Español, afiliado a la II Internacional, y defensor de posiciones revolucionarias simejares a las bolcheviques. Pese a su intento de arrastrar a la mayoría de los jóvenes socialistas, su éxito inicial fue muy escaso; no consiguió pasar de los 2.000 miembros, dirigidos por figuras como Juan Andrada, Gabriel León Trilla, Luis Portela o Ramón Merl-

no Gracia. Era, según la frase despectiva de los socialistas, "el partido de los cien niños".

Al mismo tiempo, dentro del PSOE, el sector partidario de la adhesión a la II Internacional —los "terceristas"— intentaba arrastrar el conjunto de la organización hacia su postura. Pero después de tres congressos, en 1919, 1920 y 1921, sólo una minoría acabó aceptando las "veintiuna condiciones" impuestas por la nueva Internacional: frente a 8.808 favorables al ingreso del PSOE en la Internacional de Viena, o Segunda y media, sólo 6.025 votos apoyaron a la Tercera. Entre ellos se encontraban algunos líderes históricos del socialismo español que integraron el Comité Ejecutivo del nuevo Partido Comunista Obrero: García Quejido, Pérezaguea, Núñez de Arenas, Anguiano, Pérez Solla, Virginia González e Isidoro Acevedo.

De momento existían ya dos partidos comunistas, cuyas relaciones iniciales se caracterizaron por las continuas pugnas y diferencias tácticas. No eran sólo diferencias de edad entre los jóvenes procedentes de las JJSS y los veteranos dirigentes del PSOE; les separaba sobre todo el mayor radicalismo de los primeros, poco partidarios de unirse a quienes acusaban de "centristas". Tuvo que intervenir la Internacional Comunista, a través de su enviado Graziadei, para que se consiguiera la unifica-

ción en una sola organización, el Partido Comunista de España (Sección Española de la III Internacional) el 12 de noviembre de 1921. Aun así, la influencia de Iglesias, las resistencias a la escisión en muchos sectores y el "sectorismo y dogmatismo", reconocidos ahora por Carrillo, dificultaron su implantación durante años. Sometido a directrices de la IC, el primer congreso de esta "secta", cuyos efectivos no superaban los dos o tres milares de afiliados, reclamaba la creación de soviets, la proclamación de la dictadura del proletariado y la insurrección armada como medio de llegar al poder.

Desde este primer congreso hasta 1956, el PCE iba a seguir incondicionalmente las orientaciones de la III Internacional y de su partido clave, el Partido Comunista de la Unión Soviética, olvidándose en muchas ocasiones de su inadecuación a las condiciones españolas. Hasta 1934, sobre todo, esta inadecuación fue patética. Reprimido tras el golpe militar de Primo de Rivera, el PCE perdió progresivamente a la mayor parte de sus primeros afiliados, vio desmantelada su organización y se encontraba aislado de las luchas de la clase obrera española, sin conseguir aprovecharse del enorme caudal de simpatía que la revolución de octubre había desencadenado en el país. Y aunque logró arrastrar a un sector de la CNT, en

especial en Sevilla, las pérdidas superaron las ganancias. Enfrentados violentamente a los socialistas, a quienes acusaban en estos años de "socialfascistas", los conflictos internos y las repercusiones en España de la pugna entre Stalin y Trotsky dieron origen a la escisión de la Federación Comunista Catalano-Baleares, cuyo líder histórico fue Joaquín Maurin, y a la aparición de la Izquierda Comunista, de carácter trotskista, a cuyo frente se colocaría muy pronto Andreu Nin.

De la secta al partido de masas

El mejor testimonio de la incapacidad comunista para enfrentarse a los acontecimientos españoles corresponde a su actividad en los primeros años de la Segunda República. En la conferencia celebrada en Bilbao en marzo de 1930 se había acordado la consigna de "un Gobierno obrero y campesino" y la creación de sindicatos comunistas. Fieles a esta idea, el 14 de abril de 1931 los comunistas reaccionaron ante el júbilo popular con gritos de "¡Abajo la República! ¡Vivan los soviets!". Sólo a finales de 1932 comenzaba el abandono del sectarismo, con la caída de Bullejos y la elección de una nueva Ejecutiva. José Díaz, procedente del grupo sevillano, era el nuevo secretario general; junto a él, Dolores Ibárruri entró ahora en el nuevo grupo dirigente. Precisamente los dos líderes que, en palabras del mismo Carrillo, convirtieron al PCE en "un partido de masas, de lucha

y de Gobierno"; quienes consiguieron sacarle de su aislamiento, y apoyándose en el espectacular viraje táctico producido en el VII Congreso de la Internacional Comunista, lanzaron la consigna del Frente Popular para la defensa de la República frente al peligro fascista.

Era un giro tardío, teniendo en cuenta la situación europea; Mussolini, Hitler o Dollfuss se habían asentado ya en el poder y el fascismo daba pruebas de no ser un simple episodio sin importancia en la evolución del sistema capitalista como la IC había creído hasta entonces. Pero a la vez fue un giro de enorme repercusión en la historia del PCE. La nueva política unitaria permitió la fusión entre las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas, y la creación de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). A esta nueva organización, que pronto se insertaría en la órbita del PCE, los socialistas, capitaneados por Santiago Carrillo (hijo de un líder histórico del PSOE, Wenceslao Carrillo), aportaron unos 80.000 afiliados, frente a los 5.000 procedentes de la Juventud Comunista, cuyo líder era en aquel momento Fernando Claudín. Estaba surgiendo así la nueva generación de dirigentes comunistas en torno al tandem Carrillo-Claudín, cuya influencia en la historia posterior del partido es bien conocida. Y no sólo eso: en Cataluña socialistas y comunistas decidirían olvidar sus querellas y fundirse igualmente en el Partido Socialista Unificado (PSUC), cuya autonomía, reflejada en su ingreso en la III Internacional, representaba un caso in-



Julián Grimau, fusilado en 1963.

sólito —hasta entonces no se había admitido más que partidos de ámbito estatal— y sería fuente de problemas y enfrentamientos en los difíciles años de la derrota y la clandestinidad.

Del Gobierno a la clandestinidad

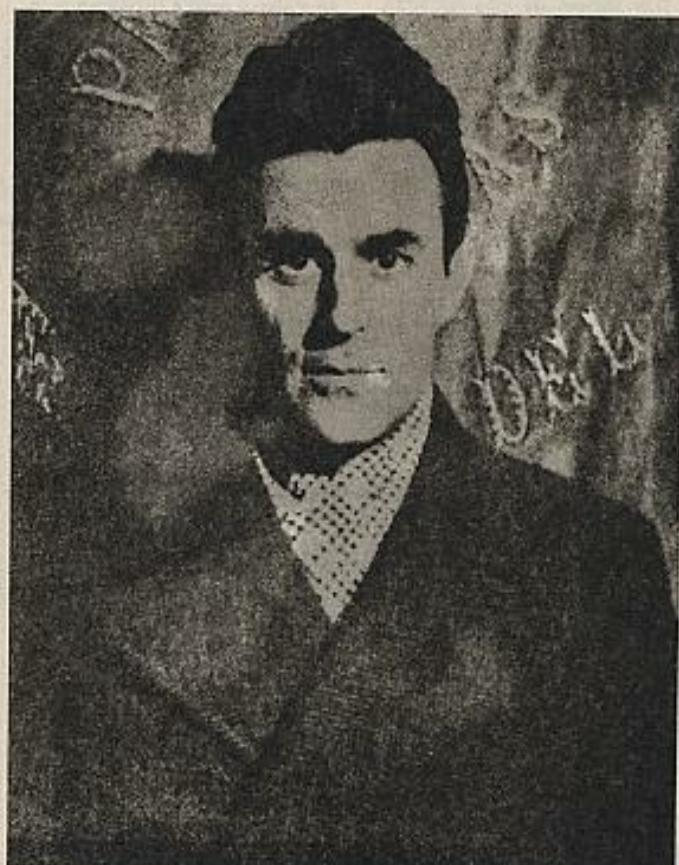
Con quince diputados en el Parlamento, elegidos en las listas del Frente Popular, el PCE entraba en la etapa más polémica de su historia: el período de la guerra civil. Su política, dirigida a ganar la guerra, dejando en un segundo plano la revolución social, iba en contra de los planteamientos abiertamente revolucionarios de la CNT y el POUM. Sus esfuerzos por presentar la guerra como una lucha de independencia nacional en defensa de la revolución democrática-burguesa, las consignas a favor de un Ejército único y disciplinado y el apoyo soviético a la República facilitaron el crecimiento del partido, que pasó de 30.000 militantes en junio de 1936 a 250.000 en marzo de 1937. Algunos historiadores achacan este sensible aumento del partido a la avalancha de afiliados procedentes de las clases medias, asustados por el radicalismo de la CNT y por sus amenazas revolucionarias; pero la hegemonía en la zona republicana se debía también a otras razones no menos importantes, en especial a la defensa a ultranza del Gobierno republicano y a su capacidad organizativa, visible sobre todo en el terreno militar.

Las dos concepciones opuestas sobre la estrategia del bando republicano se enfrentaron definitivamente en mayo de 1937 en Barcelona. Y como consecuencia del triunfo del PCE su influencia en el Gobierno alcanzó su cota más alta.

Además de acabar con la hegemonía de la CNT en Cataluña, los comunistas, fieles seguidores en este momento de la política estalinista, liquidaron el POUM, acusando a sus principales dirigentes de "agentes del fascismo". El asesinato de Andreu Nin no fue más que la trasposición a España de los procesos de Moscú de 1936-1937, y provocaron la caída de Largo Caballero y la subida de Negrín a la presidencia del Gobierno. Con este cambio, la política del PCE pasó a convertirse en la política del Gobierno: tres meses después de estos acontecimientos, en agosto de 1937, se disolvía el Consejo de Aragón y las tropas de Lister acababan con las colectividades anarquistas de la zona.

Desanimados por esta "guerra dentro de la guerra" y por los fracasos militares que culminaron con la derrota en la batalla del Ebro, muchos republicanos consideraban perdida la guerra e intentaron una paz concertada con Franco. Frente a ellos, el PCE y el Gobierno Negrín, convencidos de que si se lograba resistir unos meses más se podría enlazar con la segunda guerra mundial, trataron de mantener la resistencia hasta el último hombre. El golpe de Casado en Madrid, en marzo del 39, acabaría con sus esperanzas. Sin haber podido organizar la resistencia en la retaguardia, los últimos dirigentes del PCE, entre ellos Claudín y Togliatti, embarcaban en Cartagena hacia el exilio con las tropas franquistas pisándoles los talones.

Con la derrota comenzaba para el PCE una nueva etapa de clandestinidad, mucho más difícil que el período clandestino de la dictadura primoriverista. Aislados otra vez como consecuencia de los enfrentamientos de los años 36-39, y más tarde como resultado de la política de "guerra fría", las posiciones comunistas no conseguían librarse de la impronta estalinista, pese a que en mayo de 1943 José Stalin había decidido disolver la Internacional Comunista. La dirección del partido en el exilio —tras la muerte de José Olaz en Tiflis, en marzo de 1942, la secretaría pasó automáticamente a manos de Dolores Ibárruri—, después de mantener durante varios años el apoyo al maquis, a la vez que trataba de reconstruir la organización en el interior, enviando a dirigentes como León Trilla (cuya muerte es todavía un asunto oscuro, insuficientemente explicado), rompió en 1948 con esta estrategia y bajo el influjo de Stalin abandonó las guerrillas y comenzó la infiltración en el sindicalismo vertical. Al mismo tiempo, y a través de un discurso pronunciado por Santiago Carrillo en Toulouse el primero de mayo de 1945, se abrió paso una nueva estrategia para acabar con el franquismo: la "huelga general política", o como se la definió en ocasiones posteriores, la "huelga nacional política". Bajo cualquiera de las dos denominaciones, los intentos de ponerla en práctica —en 1959, 1961 o 1963— se saldaron con sucesivos fracasos. Y estos fracasos abrían el camino para la crisis más grave de esta etapa, protagonizada fundamentalmente por



José Díaz (1895-1942), que junto a Dolores Ibárruri, contribuyó a convertir el PCE en un partido de masas.

PCE

Fernando Claudín y Jorge Semprún.

La raíz de esta última crisis parece encontrarse en el proceso de desestalinización. La conmoción producida por el Informe secreto de Kruschev al XX Congreso del PCUS tuvo pronto repercusiones en el PCE, aunque de forma menos visible por las condiciones de clandestinidad que en los partidos de otros países europeos. Aunque parece difícil creer que los dirigentes comunistas españoles —parte de los cuales se encontraban exiliados en la URSS— descubrieron las prácticas estalinistas, el hecho es que el informe de Kruschev desencadenó una auténtica crisis de conciencia en muchos de ellos y les obligó a una revisión de ideas consideradas hasta entonces como verdades indiscutibles. Un año más tarde, el PCE lanzaba la política de "reconciliación nacional", punto de partida de sucesivos acercamientos a las demás fuerzas democráticas sobre la base de la superación de los enfrentamientos de la guerra civil. El promotor de esta nueva doctrina, Santiago Carrillo, sería elegido secretario general del PCE en el VI Congreso, celebrado en Praga en enero de 1960, mientras Dolores Ibárruri pasaba a ocupar la presidencia y perdía, por tanto, el control directo de la organización. Pero no acabaron aquí los cambios: la revisión de la etapa estalinista, unida a la constatación del fracaso de los intentos de huelga general, repercutió en una oleada de críticas a la dirección, que comienza entre algunos intelectuales del interior —como Javier Pradera o Manuel Sacristán— y tiene su punto culminante en los documentos elaborados por Claudín y Semprún, causa de su expulsión en 1964. Por debajo de los aspectos ideológicos de la disputa —las diferentes concepciones sobre la situación socioeconómica del país y las posibilidades de una revolución democrático-burguesa que acabaría con el franquismo—, era el malestar acumulado durante los años anteriores el que ahora hacia explosión.

De todas formas, en el interior este debate tuvo una escasa repercusión. Dado el difícil acceso a los textos centrales de la polémica y la necesidad de dedicar todas las energías a la lucha cotidiana contra el franquismo en unos momentos en que los militantes comunistas estaban embarcados en la gran ola de huelgas obreras en Asturias, Cataluña o el País Vasco, o comenzaban su implantación en la Universidad a través de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDÉ), las discusiones fueron escasas y la repercusión de la crisis muy reducida. Más importancia, al menos numérica, tendrían las escisiones derivadas del conflicto chino-soviético, con la aparición del primer Partido Comunista de España (marxista-leninista), cuyas críticas al "revisionismo" de Carrillo, en especial a su política de reconciliación y al abandono de la violencia como forma de lucha contra el

franquismo, sirvieron de precedente para otros grupos posteriores: el Partido Comunista Internacional, Bandera Roja...

De todas maneras, ninguno de ellos pondría en peligro durante los años sesenta y a comienzos de la década de 1970 el papel hegemónico del PCE dentro de la oposición obrera al franquismo. La práctica inexistencia del Partido Socialista Obrero Español, dominado por las posturas anticomunistas de Llopis y con dificultades para adaptarse a la acción clandestina, y las sucesivas crisis del Frente de Liberación Popular se conjugaron con el éxito de las Comisiones Obreras, creadas a partir de 1963, para convertir a los "carrillistas" (a los que hasta 1968 se definía también como "prosovieticos") en los principales protagonistas de la lucha por la democracia. Claro está que este protagonismo tenía un precio muy alto: las múltiples detenciones de militantes o líderes comunistas, desde Simón Sánchez Montero a Marcelino Camacho o Nicolás Sartorius, culminaron con el asesinato de Julián Grimau en 1963 ("Yo he conocido el crimen una mañana/color tiene mi pena de sangre humana/Sólo nubes y plomo lo contemplaron/Julián Grimau, hermano, te asesinaron").

Los orígenes del eurocomunismo

Recordando estos años difíciles y tras reconocer el peso del estalinismo durante un largo periodo histórico, Carrillo afirmaba en el mitin del pasado sábado: "Sacando la experiencia del periodo de Stalin, nos dijimos: desde ahora pensaremos con nuestra propia cabeza; juzgaremos con nuestro propio juicio, y si nos equivocamos —y nadie está libre de equivocaciones— cometremos nuestros propios errores y nadie podrá acusarnos de ser la voz de nuestro amo". Se podría pensar que esta liberación de la influencia estalinista fue más lenta de lo que parece deducirse de sus palabras, e incluso que aún no se ha completado en algunos aspectos la

menos mientras sigan sin aclararse casos como los de Andreu Nin, León Trilla o Comorera). Pero también es verdad que, poco a poco, el PCE fue marcando distancias respecto al PCUS, de acuerdo con su creciente insistencia (en especial desde la publicación de *Nuevos enfoques para los problemas de hoy*) en una "vía española hacia el socialismo" distinta de la seguida por la URSS y los países de Europa Oriental. Sin duda la condena a la invasión de Checoslovaquia —en cuya experiencia durante la primavera de Praga veían muchos dirigentes del PCE un posible modelo para un socialismo de nuevo tipo— por las tropas del Pacto de Varsovia en 1968 representó un momento decisivo en este distanciamiento. Un año antes, aprovechando el cincuentenario de la revolución de octubre, el partido había lanzado una campaña de afiliación cuyo eje era la exaltación del proceso revolucionario y la consideración de la URSS como "patria del socialismo". Un salto tan brusco en tan corto periodo de tiempo por fuerza tenía que provocar tensiones, cuyo máximo reflejo fue la expulsión de Eduardo García y Agustín Gómez de la dirección e incluso del partido. Con ellos, y más tarde con Lister, salieron del PCE algunos sectores prosoviéticos de reducida importancia numérica, pese a que probablemente recibieron ayuda de la URSS para la creación de sendos partidos anticarrillistas.

Tras librarse de esta corriente, la dirección del partido —en la que la influencia de Carrillo se había ido consolidando con el apoyo de la mayoría de la "vieja guardia"— insistiría en los últimos años en su alejamiento de la órbita soviética y en la necesidad de buscar un nuevo camino hacia el socialismo, pronto bautizado con el término de "eurocomunismo". Un camino basado en la unidad de la izquierda para el establecimiento por vía pacífica de "una sociedad socialista plural, en la que el principio de la soberanía popular se mantenga y consolide indestructiblemente"; opuesto, por tanto, al proyecto socialdemócrata, pero también a los modelos socialistas conocidos hasta

ahora y cuya definición intentaría Carrillo en los meses de paso de la clandestinidad a la legalidad del partido a través de su libro *Eurocomunismo y Estado*. La estrategia adecuada para la conquista de estos objetivos pasaba inicialmente por la unión de todas las fuerzas democráticas (el "pacto por la libertad", definido desde 1970, y su plasmación en la Junta Democrática en los momentos finales del franquismo) con el fin de formar un Gobierno de concentración que liquidara el poder franquista y abriera un proceso constituyente. Sólo desde esta base se creía posible la "ruptura democrática", que en el planteamiento del PCE prepararía las condiciones para el comienzo de la transformación socialista.

La vuelta a la legalidad

El final de la historia es ya sólidamente conocido. El 9 de abril de 1977, la legalización del PCE ponía fin a una larga clandestinidad (de sus sesenta años de existencia, durante más de cuarenta y cinco el partido ha estado fuera de la ley) y abría nuevos caminos para la renovación del mismo, reflejada en el abandono del leninismo en el congreso de 1978 y en la sustitución de algunos líderes históricos —en especial en Cataluña, Euskadi y Galicia— por nuevos dirigentes formados en la lucha antifranquista. Pese a ello, y pese a la relativa autocritica de la dirección del PCE, empeñada en demostrar la sinceridad de sus convicciones democráticas, los recelos alimentados por cuarenta años de propaganda franquista han impedido hasta ahora que sus resultados electorales respondan a sus esfuerzos en la lucha contra la dictadura.

Después de esta larga y compleja evolución, ¿qué queda hoy de los planteamientos de aquel primer Partido Comunista fundado en 1920? Queda, sin duda, una organización que se ha mantenido sin rupturas a pesar de las múltiples dificultades encontradas a lo largo de su trayectoria; queda también una dirección, en gran medida forjada durante el periodo republicano, y una militancia más compacta que en los demás partidos (Annie Kriegel ha definido al PCF como una "contracultura", y esta caracterización puede aplicarse también al PCE). Pero han desaparecido la mayoría de los rasgos que definieron la ideología inicial del partido. Abandonado el leninismo, reconocida la necesidad de una mayor democracia interna, así como el papel decisivo de la democracia y el pluralismo político para el avance hacia el socialismo, los llamamientos de Carrillo a nuevas formas de unidad, "superando resentimientos y heridas históricas", las críticas a la Unión Soviética y a algunos aspectos del propio pasado del partido parecen abrir una nueva etapa cuyos resultados son, por ahora, totalmente imprevisibles. ■ M. R.



Miembros de la Ejecutiva del Partido Comunista de España celebran la legalización del partido en abril de 1977.